

¡A por la minoría!

Santos Juliá, El País, 12/03/2000

Entre las cosas más chocantes que hemos tenido ocasión de ver durante la campaña electoral ha ocupado un lugar de privilegio el deseo ampliamente manifestado por los principales partidos de no conseguir la mayoría absoluta. PP y PSOE quieren ser Gobierno, faltaría más; pero ninguno de los dos considera oportuno insistir en la necesidad de obtener 176 diputados para serlo sin necesidad de depender, como dicen los futbolistas, más que de sí mismos, no de lo que hagan otros. Es como si les diera reparo admitir que la legítima ambición de todo partido político consiste en gobernar con mayoría.

Como seguramente este temor no tiene nada que ver -¿o sí?- con el batacazo electoral que se dio en febrero de 1936 José María Gil Robles cuando proclamó a grandes voces que su partido, la CEDA, iba "¡A por los 300!", habrá que buscarle causas más inmediatas. La primera no se remonta más allá de 1996, cuando el PP logró modificar a la baja la amplísima distancia que le separaba del PSOE en el arranque de la campaña electoral dando por supuesta una victoria apabullante. Los populares se dieron buena maña para asustar a los dubitativos y movilizar a los adversarios, con el decepcionante resultado de triunfar por la mínima. Aprendida la lección, han adoptado esta vez lo que la ola de mercadotecnia que nos invade llama perfil bajo, casi un aire de perdedores: quieren que el público piense que esta vez no quieren ganar por goleada.

Los socialistas no han tenido que retorcer tanto su magín para presentarse como aspirantes muy cualificados a una decorosa minoría. Desde que aquel titán electoral que fue su anterior secretario general perdiera la mayoría en los comicios de 1993, nadie se atreve a proclamar no ya el deseo, ni siquiera la intención de ir a por todas. En el inicio de esta campaña ya dejaron muy claro que su pretensión consistía en formar un Gobierno denominado progresista o de progreso, a veces también de izquierda, lo que no es exactamente igual que un Gobierno socialista. La mayoría absoluta queda lejos de sus aspiraciones y hasta la descartan dando por supuesto que, en la más favorable de las hipótesis, gobernarían con Izquierda Unida, aunque tampoco hayan derrochado grandes esfuerzos en esa dirección. La anunciada coalición electoral, lejos de avanzar hacia la

unidad de acción, ha retrocedido hacia un mero pacto de no agresión que, en nuestro sistema electoral, no garantiza más escaños aunque pueda repetirse la misma suma de votos.

De modo que, al final, el probado deseo de no levantar sospechas acerca de sus más recónditas intenciones, ha llevado a ambos partidos a pugnar, no por la mayoría absoluta sino, más modestamente, por la minoría mayoritaria. PP y PSOE parecen haberse percatado de que aspirar a todo el poder causa alarma social. La relación elector/partido es en España tan especial que mucha gente dispuesta a dejarse cortar la mano con tal de no verla votando al partido de la competencia, vota sin embargo al suyo encendiendo una vela al diablo para que no gane demasiado. El público, debido a su tantas veces celebrada madurez democrática, desconfía de lo que un solo partido es capaz de destrozar si se le entrega todo el Gobierno: si se trata del PSOE, porque la repetición de mayorías absolutas no ayudó, por decirlo suavemente, a elevar la calidad de la democracia; si se trata del PP, porque si a su conducta con mayoría relativa le han sobrado ínfulas autoritarias, con la absoluta, para qué te cuento.

Como una parte decisiva del electorado teme las mayorías absolutas, los partidos actúan como si no las desearan. Su consigna no es: vamos a barrer, sino: vamos a por la minoría. Por 166 escaños para su partido apostaba a la vista de todo el mundo el director de la campaña del PP; con 10 y hasta con 20 menos se daría con un canto en los dientes el del PSOE. Es como si animaran a su público diciéndole: no tengáis miedo, hombre, votadnos; si, después de todo, no vamos a ganar...

Mérito propio, demérito ajeno

Santos Juliá, El País, 19/03/2000

En esta ocasión, las reacciones ante el triunfo del Partido Popular han sido bien diferentes a las de hace cuatro años: su victoria no es sólo inapelable, superando con cierta holgura el listón de los 10 puntos que lo separa del segundo clasificado, sino merecida y hasta -si se cree lo escrito por una parte de la prensa europea- ejemplar: es un nuevo modelo de derechas lo que ha triunfado en España. Un modelo que, en opinión de *Le Monde*, consiste en una mezcla de políticas sociales con la clásica receta neoliberal: mantener el gasto en pensiones, desempleo, educación y sanidad, mientras se reducen los impuestos directos, se privatizan empresas y se liberaliza el mercado.

Naturalmente, no sólo a base de un programa de política económica y social se triunfa: un ingrediente principal del éxito de Aznar es el tipo de partido que ha contribuido a crear, elevado hoy a ejemplo en el que debe mirarse la derecha francesa, enferma del mal del faccionalismo. El PP no sólo cuenta con una política que funciona sino que puede presumir de una organización que ha superado dos carencias históricas de la derecha en España. Una, su irregular distribución territorial: el PP ha obtenido un resultado algo más que apreciable en Cataluña, pisa los talones al PSOE en Andalucía, lo deja atrás en Extremadura, iguala al PNV en número de diputados en Euskadi y no tiene verdadero adversario en Galicia. Otra, su tradicional fragmentación: el PP ha logrado fundir trozos dispersos de la derecha en una única organización con un liderazgo indiscutido. Por haber superado estas dos carencias, el PP es en el año 2000 lo más parecido al PSOE de 1982: si aquel PSOE puso punto final a una larga historia de frustraciones socialistas, este PP puede también, si quiere, enterrar bajo siete llaves la peor historia de la derecha española.

Buena parte de la explicación de este gran salto adelante radica en los méritos propios, pero como las elecciones son siempre una competición, también cuentan algo los deméritos ajenos. La iniciativa socialista de elegir candidato a la presidencia de Gobierno por medio de elección directa de los afiliados ha actuado al final de la carrera como una bomba de relojería colocada bajo la línea de flotación de su grupo dirigente. La forma en que la ejecutiva del partido administró su derrota ante la militancia la

llevaba a un callejón sin salida: no puede ser candidato de un partido alguien a quien ese mismo partido ha negado expresamente el mandato para serlo. No se trata de las cualidades que adornan a su último secretario general, sino de una cuestión de autoridad política y moral.

Esa autoridad, muy debilitada ante sus militantes, no se reafirmó ante sus votantes con la única propuesta novedosa salida del PSOE en vísperas electorales: la unidad de la izquierda. De nuevo, una brillante apertura de juego, que por unos instantes desconcertó a los adversarios, se quedó en agua de borrajas inmediatamente que los otros jugadores dispusieron sus fichas en el tablero. Almunia permaneció indeciso, vacilante, como si no trajera pensado más que su primer movimiento, ante la respuesta de Frutos. ¿El resultado? Una decepción, no tan fuerte como para hacer cambiar su voto a 7,8 millones electores, pero lo suficientemente profunda como para dejar en casa a cerca de otros dos millones: la distancia así adquirida por el PP, más que a su avance, indiscutible pero no apabullante, se debe al retroceso socialista.

La avalancha de dimisiones desencadenada por la renuncia del secretario general revela que el PSOE, además de carecer de un proyecto político atractivo y de atravesar graves problemas de dirección, corre el riesgo de sufrir una quiebra orgánica. Hay quien echa de menos un poco de caos; en el principio fue el caos, dicen, a modo de consuelo. Y es verdad, pero del caos sólo emerge el orden cuando algún dios benévolo lo cubre dulcemente con su aliento.